

Juzgado 03 Administrativo - Atlantico - Barranquilla

De: Myriam Esther Herrera Betancourt <myriam.herrera@uspec.gov.co>
Enviado el: viernes, 06 de diciembre de 2019 4:50 p. m.
Para: Juzgado 03 Administrativo - Atlantico - Barranquilla
Asunto: Contestación dda reparación directa rad. 2018-00350
Datos adjuntos: Contestación Reparación Directa Rad. 2018-00350.pdf

Bogotá D.C., diciembre de 2019

Doctora
SHIRLEY MARGARITA MEDINA CASTILLO
JUZGADO TERCERO (3) ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA
Barranquilla, Atlantico
E. S. D.

Referencia: Expediente No. 08001333300320180035000
Asunto: Contestación de Demanda de Reparación Directa
Demandante: ABEL JOSE CORONADO MEZA
Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO- INPEC Y USPEC

Respetada juez:

MYRIAM ESTHER HERRERA BETANCOURT, mayor y vecina de Bogotá, abogada identificada con cédula de ciudadanía No.1.098.680.103 expedida en Bucaramanga y con Tarjeta Profesional No. 251.916 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de Apoderada Especial de **LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC** – dentro del proceso de la referencia, me permito de conformidad con lo estipulado por el despacho contestar la demanda, la cual adjunto al presente correo.

Igualmente le solicito al despacho tener en cuenta este correo mientras llega el físico de la contestación por **correo postal**, para que sea integrada al plenario de la demanda para los fines pertinentes, la anterior consideración en atención a que me encuentro desde la semana pasada fuera de la ciudad atendiendo audiencias judiciales.

Le agradezco su comprensión y colaboración.

Cordialmente

 Pruebas Barranquilla.zip 

--
Myriam Esther Herrera Betancourt
Profesional Universitario
Oficina Asesora Jurídica - Abogada Defensa Judicial
myriam.herrera@uspec.gov.co
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento Torre 4 Piso 12
Conmutador: 4864130 Ext. 1221
Bogotá, Colombia


www.uspec.gov.co






Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC 05/12/2019 Folios: 16	
Anexos: 1, Tipo Anexo: CD - DVD	E-2019-026827
Origen: 120-1/GICDT/GRUPO DE JURISDICCION: COACTIVA, DEMANDAS Y DEFENSA JUDICIAL: ACCIONES DE TUTELA	
Destino: JUZGADO 03 ADMINISTRATIVO ORAL DE BARRANQUILLA	
Asunto: CONTESTACIÓN DEMANDA	

Bogotá D.C., diciembre de 2019

Doctor

SHIRLEY MARGARITA MEDINA CASTILLO
JUZGADO TERCERO (03) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
Barranquilla, Atlántico
E. S. D.

Referencia: Expediente No.08001333300320180035000
Asunto: Contestación de Demanda de Reparación Directa
Demandante: ABEL JOSÉ CORONADO MEZA
Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO- INPEC Y USPEC

Respetado Juez:

MYRIAM ESTHER HERRERA BETANCOURT, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 1.098.680.103 de Bogotá, abogada en ejercicio portadora de la Tarjeta Profesional No.251.916 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de apoderada especial de LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC-, según el memorial poder que me fue otorgado por la doctora **JULIBETH DE LEÓN CUETO**, en representación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, nombrada en el cargo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) mediante Resolución No.668 de 1 de octubre de 2019, delegataria de la función de representación judicial de la entidad conforme a la Resolución No. 84 de 7 de marzo de 2013 de la Dirección General, procedo dentro del término legal a **CONTESTAR LA ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA** presentada en el proceso de la referencia, en los siguientes términos:

Me permito hacer las siguientes precisiones previas a dar respuesta de fondo sobre los hechos y pretensiones de la demanda:

I. FRENTE A LOS HECHOS

Inicialmente formular oposición a los hechos dado que la entidad que represento no tiene funciones de custodia y vigilancia a cargo del INPEC, no obstante frente a los hechos me manifestaré de la siguiente forma:

AL HECHO PRIMERO. NO NOS CONSTA no es un hecho de mi representada.

A LOS HECHOS SEGUNDO AL QUINTO: En síntesis, se refieren a las condiciones en que presuntamente conviven las personas privadas de la libertad al interior del Establecimiento de la Modelo de Barranquilla, en donde el señor **ABEL JOSE CORONADO MEZA**, durante su tiempo de reclusión, y que se resumen en lo siguiente: I. El causante estuvo presuntamente recluido en el Establecimiento de Barranquilla desde el 17 de enero de 2013. II. En agosto de 2016 fue ingresado al área de sanidad del Establecimiento por mal estado de salud. III. Fue diagnosticado con TBC y trasladado en varias ocasiones a sus controles médicos durante.

Avenida Calle 26 No. 69 - 78 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13, 14
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co



La justicia
es de todos

Código: G1-S1-FO-03
Versión: 13

Vigencia: 21/01/2019

Página: 1 de 16



IV. Siendo el hacinamiento una causa para el padecimiento de esta enfermedad e impedimento para su mejoría.

Al respecto **NO NOS CONSTA** ninguno de los hechos y circunstancias descritas por parte de la accionante, sin embargo, tal y como se demostrará más adelante, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, de conformidad con el marco funcional y de competencias que nutre su contenido obligacional asignado a la entidad en virtud del Decreto 4150 de 2011, la Ley 1709 de 2014 y Decreto 1069 de 2015 y normas que lo adicionan y complementan, en lo que respecta, tanto al suministro de bienes y servicios, como el mejoramiento de la infraestructura del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Barranquilla, la adecuada prestación del servicio de salud, ha adelantado todas y cada una de las gestiones administrativas, logísticas y contractuales para la satisfacción o consecución del fin para el cual fue creada la entidad, lo anterior conforme a la priorización de necesidades que realiza el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, dentro de cada Establecimiento de Reclusión a su Cargo y para cada vigencia fiscal, en materia de infraestructura y suministro de bienes.

Es importante mencionar ya que dentro del marco funcional la entidad, ha realizado los contratos de mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura carcelaria en el país, así como también la generación de cupos, la prestación de los servicios de alimentación y la implementación del nuevo modelo de salud para la PPL contrato de fiducia Mercantil sujeto al consorcio PPL 2019, mediante el contrato No. 150 de 2019, el cual garantiza la prestación de los servicios de salud tal y como se demostrara en acápite posteriores.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES

A través de la presente demanda, se busca que las entidades demandadas sean declaradas civilmente responsables por los daños morales y por la afectación de derechos constitucionales y fundamentales presuntamente ocasionados a la familia del señor ABEL JOSE CORONADO MEZA, por la falla del servicio de salud y a causa del hacinamiento soportado en la Cárcel de Barranquilla, atendiendo que por la primera modalidad de daño, esto es PERJUICIOS MORALES, se deprecia una suma superior a los 200 SMLV.

Al respecto, **ME OPONGO CATEGÓRICAMENTE** a la prosperidad de cada una de las pretensiones incoadas, **EN LO QUE RESPECTA A LA USPEC, como quiera que, tal y como se demostrará en el acápite siguiente**, en primer lugar, los daños alegados no se encuentran plenamente acreditados, ni tampoco son determinados o determinables, por lo que, al ser el "daño" el primer elemento de la responsabilidad civil extracontractual, su ausencia o falta de acreditación toma inocuo el estudio de imputación fáctica o jurídica de aquel a la administración.

Así mismo, y sin perjuicio de lo anterior, los daños alegados tampoco podrían ser imputados fáctica ni jurídicamente a la USPEC, en razón del contenido obligacional asignado legal y reglamentariamente tanto por el legislador como por el Gobierno Nacional a esta Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, a través de los Decretos 4150 de 2011, Ley 1709 de 2014 y Decreto 1069 de 2015 y el cual ha sido satisfecho por parte de la USPEC a través de las gestiones administrativas, logísticas y contractuales para el suministro de bienes y servicios, mejoramiento de la infraestructura carcelaria de todo el país, incluido la Cárcel de Barranquilla, y la suscripción de los contratos de fiducia mercantil para la prestación del servicio de salud a la PPL.

En virtud de lo anterior, no existe razón ni fundamento a partir del cual sea dable sostener que la USPEC se ha sustraído del cumplimiento del marco obligacional que le impone la precitada normativa, es decir, que el servicio a su cargo no ha sido prestado, o se ha suministrado de forma ineficiente, irregular o tardía; asimismo, la USPEC tampoco es la entidad encargada de ejercer la vigilancia y custodia de las personas privadas de la libertad, por lo que no existe una posición de garante respecto de aquella población. Por tal

Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13, 14
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co



La justicia
es de todos

Ministerio de Justicia



razón, es evidente que los daños alegados, de forma alguna podrían ser imputados a mi representada, desde ninguno de los dos regímenes de responsabilidad civil extracontractual, esto es, subjetivo u objetivo.

Entonces, no existe una relación directa entre los hechos endiligados y el objeto de creación de la Unidad, toda vez que únicamente tiene como fin gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativos requeridos por el INPEC; y en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, motivo o razón, la vigilancia y custodia de la población privada de la libertad, como así lo prescribe el Artículo 4° del Decreto 4150 de 2011, que indica: Objeto: La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- tiene como objeto gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC.

Cabe resaltar que, el cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, como miembro especial y dependiente de esa entidad, tendrá la función expresa de vigilancia y control de los Privados de la Libertad, como así lo expresa el inciso número 6 del artículo 2° del Decreto 4151 de 2011, definiendo que ostentará la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad al interior de los centros carcelarios para con ello garantizar de primera mano su integridad, seguridad y el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial.

Finalmente, basta con señalar que el actor ni siquiera detalla la acción u omisión en que haya podido incurrir la Unidad; tal y como lo consagra el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, que al tenor señala:

"Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma". (Subrayado fuera del texto).

III. RAZONES DE DEFENSA

1. Ausencia de acreditación del daño antijurídico como primer elemento de la responsabilidad civil extracontractual.

De conformidad con la teoría de la responsabilidad civil extracontractual, para que ésta pueda ser endiligada a una entidad de carácter estatal en virtud del artículo 90 superior, es necesario que exista una perfecta cohesión entre los siguientes tres institutos jurídicos: Daño, Imputación y Fundamento del Deber Jurídico de Reparar.

En relación con el daño, ha sostenido el H. Consejo de Estado Colombiano:

"...[e]l daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura–, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por



quien lo solicita, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar el interés que se debate en el proceso”¹

Quiere decir lo anterior que, el “daño” constituye el primer elemento o presupuesto de la responsabilidad civil extracontractual, y su inexistencia o ausencia de acreditación, hace inócuo el estudio de la imputación frente a la entidad estatal demandada.

En tal virtud, a continuación me permitiré exponer las razones por las cuales, en el presente asunto, ni el daño moral, ni el derivado de la afectación a derechos constitucionales, alegado por la parte actora se halla acreditado, así:

1.2 La ausencia de acreditación del “daño moral”

En relación con esta modalidad de perjuicio, ha sostenido el H. Consejo de Estado:

“Cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en “el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien”. Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado. El daño moral producto de lesiones puede configurarse tanto en la persona que sufre la lesión, a la que se conoce como víctima directa, como también en sus parientes o personas cercanas, víctimas indirectas”²

Así mismo, en relación con la indemnización por el daño moral derivado de lesiones, el H. Consejo de Estado ha sostenido de forma pacífica que el criterio que determina el monto de aquella indemnización no es otro que la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima, estableciéndose como monto máximo de aquella modalidad de indemnización 100 SMLMV para la víctima directa del daño y para las personas con quienes aquella tiene relación afectiva conyugal y paterno filial **SOLO CUANDO LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN SUPERA EL 50%**³.

Al respecto, y partiendo de la base de que en el presente asunto el daño alegado no deviene de la muerte de la víctima directa de un daño, vale la pena preguntarse:

- ¿Sobre qué base o de qué manera es determinable el daño alegado por la parte demandante?
- ¿Sobre qué criterios se pretende endilgar responsabilidad civil al estado derivado de un presunto daño moral?
- ¿Cuáles son las pruebas allegadas por la parte actora que permitan determinar el monto de la indemnización por aquella modalidad de daño?

La respuesta a dichos interrogantes, solo permiten sostener de manera categórica, que en el presente asunto **EL DAÑO ALEGADO, ES INCIERTO, EVENTUAL E HIPOTÉTICO**, y asimismo **TAMBIEN ES INDETERMINADO E INDETERMINABLE**., además de tratarse de un daño que no comporta vocación de ser reparado, también se trata de una pretensión absolutamente desfasada de las reglas establecidas por el H. Consejo de Estado, en relación con el monto máximo de indemnización por la modalidad de daño moral, cual es de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al tenor de lo atrás expuesto.

¹ CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN C, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO Reparación Directa Radicado: 05001232500019942279 01 Sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012)

² Consejo de Estado Colombiano- Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera Subsección B- Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth Bogotá D.C., Radicación Número:19001-23-31-000-1997-04001-01(19836) Sentencia del 30 de Junio de 2011

³ Consejo de Estado Colombiano- Sección Tercera
Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13, 14.
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co





En conclusión, de conformidad con las precitadas reglas jurisprudenciales del H. Consejo de Estado, en el presente asunto no hay lugar a desplegar un estudio de imputación jurídica al Estado, al buscarse la reparación de un daño **TANTO INCIERTO, HIPOTÉTICO Y EVENTUAL, COMO INDETERMINADO E INDETERMINABLE**; y cuyo monto de reparación además de ser desfasado y desproporcionado en relación con los criterios establecidos por dicho alto tribunal, también carece de elementos que permitan establecer, asimismo es indeterminado e indeterminable.

En tal virtud, es evidente que la pretensión encaminada al resarcimiento del presunto daño moral ocasionado a la parte demandante, no comporta vocación de prosperidad alguna.

1.3 Ausencia de acreditación del daño derivado de la vulneración de los Derechos Constitucionales Fundamentales

Al respecto, lo primero que vale la pena advertir, es que el H. Consejo de Estado estableció una tipología de daño denominada **"Daño por Afectación o Vulneración Relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados"** y al respecto, ha sostenido dicha H. Corporación:

"Procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente o estable y los parientes hasta el 1° de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza".

Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobando las violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. Para el efecto el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará las medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados.

En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o derecho afectado."

Al tenor de lo anterior, vale la pena destacar que:

- En primer lugar, la finalidad de esta tipología de perjuicio no es otro que garantizar la reparación integral tanto de la víctima directa del daño como de sus familiares, por lo que las medidas que se privilegian, **no son de carácter indemnizatorio sino compensatorio.**
- En segundo lugar, solo de manera excepcional, la restauración por dicha modalidad de perjuicio es medible en dinero, y aquella excepción se halla supeditada a que las medidas de satisfacción por las que propende esta tipología de daño, no son suficientes para garantizar la reparación integral de sus destinatarios.

⁴ Consejo de Estado Colombiano- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera "Documento final aprobado mediante acta del 28 de agosto de 2014 referentes para la reparación de perjuicios inmateriales."
Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13, 14
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co





- Cuando aplica la precitada excepción, el monto máximo de indemnización establecido por el H. Consejo de Estado es de 100 SMLMV.

Hechas las anteriores precisiones, y descendiendo al presente asunto, sea lo primero advertir, que del libelo demandatorio no se desprenden la certeza del daño alegado bajo esta modalidad, pues la parte demandante pareciera tener la convicción de que, por el hecho de estar recluso en un establecimiento penitenciario y carcelario, per se, se configura esta modalidad de daño y pretende obviar la necesaria acreditación de aquel, conforme lo exigen las precitadas posiciones del H. Consejo de Estado en virtud de las cuales, el daño incierto, eventual e hipotético no da lugar a indemnización.

En segundo lugar, la parte demandante no establece de forma alguna, por qué la indemnización pretendida por la presunta causación de esta modalidad de perjuicio, debe ser medible en dinero y no a través de las medidas de restauración señaladas por el H. Consejo de Estado, ES DECIR: ¿por qué el caso del señor ABEL JOSE CORONADO MEZA escapa de la regla general en virtud de la cual se privilegian las medidas compensatorias más no indemnizatorias? o, ¿en qué medida aquellas medidas compensatorias no son suficientes para la reparación integral del eventual daño alegado?

Finalmente, también vale la pena advertir que en el presente asunto, la pretensión de reconocimiento y pago de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se halla desfasada y escapa, desde cualquier perspectiva de las reglas establecidas por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud de la cual, solo en aquellos casos excepcionales en que esta modalidad de perjuicio es tasable en dinero, el monto máximo de la indemnización reconocida por aquel, es de 100 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

En conclusión, la pretensión encaminada al resarcimiento por esta modalidad de perjuicio, tampoco se encuentra llamada a prosperar, como quiera que, en primer lugar, el daño no se halla plenamente acreditado, y en segundo lugar, de estarlo, el demandante no establece las razones por las cuales su circunstancia específica y concreta, conlleva a que se configure la excepción a la regla general consistente en que la reparación por esta tipología de daño, es de carácter compensatorio mas no indemnizatorio, y solo de manera excepcional es medible en dinero, cuando las medidas restaurativas no son suficientes para la reparación integral del perjuicio.

Así las cosas, en el presente asunto, la pretensión encaminada a su resarcimiento, tampoco comporta vocación de prosperidad dentro de la presente Litis.

2. El cumplimiento, por parte de la USPEC, del marco funcional y competencial que nutre su contenido obligacional.

Pese a lo expuesto en precedencia, lo cual en estricto sentido impide desplegar un estudio de imputación fáctica y jurídica dentro del presente asunto, ante la ausencia de acreditación del daño antijurídico que sirve de fundamento a las pretensiones de la demanda, en el evento de que su H. Señoría considere desplegar aquel estudio, los daños alegados por la parte actora, de forma alguna podrían serle imputados fáctica o jurídicamente a la USPEC, al tenor de los siguientes argumentos:

2.1 El Marco Funcional y Competencial asignado legal y reglamentariamente a la USPEC que nutren el contenido obligacional de la Entidad.

Al respecto, lo primero que vale la pena advertir, es que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, surgió como resultado de la escisión de las funciones administrativas y de ejecución, que se encontraban asignadas al INPEC para el cumplimiento de sus objetivos.

Es así, como el Gobierno Nacional, a través del Decreto 4150 de 2011 creo esta Unidad, con el fin de que el Estado Colombiano cuente con una entidad especializada en la gestión y operación para el suministro de los

Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13, 14
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co





bienes y la prestación de los servicios requeridos para garantizar el bienestar de la población privada de la libertad, y de esta manera, brindar apoyo administrativo y de ejecución de actividades que soporten al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para el cumplimiento de sus objetivos de modo más eficiente, estableciendo, en el artículo 4 *ejusdem*, como objeto de la USPEC:

"[g]estionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC."

Así mismo, dicha norma define en su artículo 5^o las precisas funciones asignadas a la entidad, de las cuales me permito destacar las siguientes:

"(...) 3. Definir, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, los lineamientos que en materia de infraestructura se requieran para la gestión penitenciaria y carcelaria (...)"

5. Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición, suministro y sostenimiento de los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y de infraestructura que sean necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria."

Igualmente establece en su artículo 29:

"El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) continuará ejerciendo las funciones escindidas hasta que entre en operación la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC), lo cual deberá ocurrir dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente decreto. El Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC) deberá adelantar de manera inmediata las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente decreto que entrará a regir dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente decreto"

Quiere decir lo anterior que las funciones asignadas por el Gobierno Nacional a esta entidad, son de carácter eminentemente administrativo, logístico y contractual, con el fin de brindar apoyo al INPEC en la gestión

³ "1. Coadyuvar en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC, en la definición de políticas en materia de infraestructura carcelaria."

2. Desarrollar e implementar planes, programas y proyectos en materia logística y administrativa para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios que debe brindar la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.

3. Definir, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, los lineamientos que en materia de infraestructura se requieran para la gestión penitenciaria y carcelaria.

4. Administrar fondos u otros sistemas de manejo de cuentas que se asignen a la Unidad para el cumplimiento de su objeto.

5. Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición, suministro y sostenimiento de los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y de infraestructura que sean necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria.

6. Elaborar las investigaciones y estudios relacionados con la gestión penitenciaria y carcelaria, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho y hacer las recomendaciones correspondientes.

7. Promover, negociar, celebrar, administrar y hacer seguimiento a contratos de asociaciones público-privadas o de concesión, o cualquier tipo de contrato que se suscriba que tengan por objeto la construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y prestación de servicios asociados a la infraestructura carcelaria y penitenciaria.

8. Realizar, directamente o contratar con terceros, las funciones de supervisión, interventoría, auditorías y en general, el seguimiento a la ejecución de los contratos de concesión y de las alianzas público-privadas, o de concesión, o cualquier tipo de contrato que se suscriba.

9. Gestionar alianzas y la consecución de recursos de cooperación nacional o internacional, dirigidos al desarrollo de la misión institucional, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y las autoridades competentes.

10. Asesorar, en lo de su competencia, en materia de gestión penitenciaria y carcelaria.

11. Diseñar e implementar sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de la misión institucional.

12. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la Entidad"

Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia

Edificio Elemento, Torre 4 - Pisos 12, 13, 14

Teléfono: (57) (1) 4884130

www.uspec.gov.co





penitenciaria y carcelaria, es decir la función carcelaria y penitenciaria radica en manos del INPEC siendo mi representada únicamente un apoyo administrativo a la gestión desarrollada por dicho instituto.

Aunado a lo anterior, la USPEC es una entidad de creación reciente, y cuya finalidad es buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la población privada de la libertad, a través del suministro de bienes y servicios, mejoramiento de la infraestructura penitenciaria y carcelaria y encargada de suscribir un contrato de fiducia mercantil, con el fin de que el fideicomitente, contrate los servicios de salud de la Población Privada de la Libertad, funciones que como se demostrará a continuación, han venido siendo satisfechas en su integridad a través de las gestiones logísticas administrativas y contractuales desplegadas por la entidad, sin que sea dable, de forma alguna, que los presuntos daños alegados, y cuya génesis se remonta a décadas atrás en donde la USPEC ni siquiera existía, puedan ser imputados a mi representada.

Afirmación que encuentra fundamento, entre otras, en las sentencias T- 606, T-607 y T- 153 de 1998 proferidas por la Corte Constitucional Colombiana, a través de la cual se declaró el **ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LAS PRISIONES COLOMBIANAS**, en donde, entre otros aspectos, dicho tribunal ordena:

"[a]l INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación elaborar, en un término de tres meses a partir de la notificación de esta sentencia, un plan de construcción y refacción carcelaria tendente a garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales (...) Igualmente, el Gobierno deberá adelantar los trámites requeridos a fin de que el mencionado plan de construcción y refacción carcelaria y los gastos que demande su ejecución sean incorporados dentro del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones"

Así mismo, ordena:

"[l]a realización total del plan de construcción y refacción carcelaria en un término máximo de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones"

Quiere decir lo anterior, que las difíciles circunstancias planteadas por la parte demandante, y de la cual se derivan los presuntos daños enrostrados, no son para nada novedosas, sino que son el resultado y consecuencia de una problemática de orden "estructural" de muchos años atrás, en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del País, que prevalecía cuando esta entidad ni siquiera existía, y que solo a partir de su creación, han venido disminuyendo gracias a la gestión administrativa, logística y contractual desplegada por la entidad, sin que sea humanamente posible que en tal corto tiempo de creación, la USPEC pueda superar al 100 % la problemática del hacinamiento carcelario que aqueja al país desde décadas atrás.

En este punto, es menester destacar a su señoría, las gestiones desplegadas por la USPEC en el marco de sus competencias en procura de la mejora de la calidad de vida de la población privada de la libertad, en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario Bogotá, así:

- a. Las gestiones desplegadas por la USPEC dentro de su marco de competencias, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población privada de la libertad en el EPC a nivel nacional así:

En lo que respecta a la salud de la PPL.

En lo que respecta al servicio de SALUD para la PPL, lo primero que vale la pena destacar, es que el legislador colombiano, a través de la **Ley 1709 de 2014** reformó algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985, estableciendo en su artículo 66:

Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13,14
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co





"Modifícase el artículo 105 de la ley 65 de 1993, el cual quedará así: Servicio médico penitenciario y carcelario El Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deberán diseñar un modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de la libertad, incluida la que se encuentra en prisión domiciliaria, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación. Este modelo tendrá como mínimo una atención intramural, extramural y una política de atención primaria en salud"

Así mismo, creó el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, al siguiente tenor:

"Créase el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, el cual estará constituido por recursos del Presupuesto General de la Nación. Los recursos del Fondo serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento del presente artículo y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen.

Parágrafo 2°. El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, se encargará de contratar la prestación de los servicios de salud de todas las personas privadas de la libertad, de conformidad con el modelo de atención que se diseñe en virtud del presente artículo

Posteriormente a través del Decreto 1069 de 2015 el Gobierno Nacional expidió el Decreto único Reglamentario del Sector Justicia, el que fue adicionado a través de decreto 2245 de 2015, que dispuso:

"Adiciónese el Capítulo XI al Título I de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho", con sus correspondientes secciones, del siguiente tenor: "CAPÍTULO XI Prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)"

Estableciendo las funciones de la USPEC, en relación con la prestación del servicio de salud de la PPL en el siguiente sentido,

Artículo 2.2.1.11.3.1: Contratación de los servicios de salud. Previa deliberación y decisión del Consejo Directivo Fondo Nacional de Salud de Personas Privadas de la Libertad, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, en calidad de Secretaria Técnica de dicho consejo, remitirá a la entidad fiduciaria administradora de los recursos del Fondo la solicitud de necesidades de contratación. La entidad fiduciaria contratara y pagara los servicios autorizados.

Artículo 2.2.1.11.3.2: Funciones de la USPEC. En desarrollo de funciones previstas en el Decreto Ley 4150 de 2011 y demás que fijen sus competencias, corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, en relación con la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad: ()

4. Contratar la entidad fiduciaria con cargo a recursos del Fondo Nacional Salud de la Personas Privadas de la Libertad y establecer las condiciones para que dicha entidad contrate la prestación integral y oportuna los servicios de salud a la población privada de la libertad, de acuerdo con decisiones del Consejo Directivo Fondo, así como con el Modelo de Atención en Servicios



5 Contratar las actividades de supervisión e interventoría del contrato de fiducia mercantil que se suscriba, con los recursos del Fondo Nacional de Salud las Personas Privadas de la Libertad de acuerdo a lo previsto en numeral 6 del artículo 2.2.1.11.2.3., del presente capítulo. (...)

Posteriormente a través del Decreto 5159 de 30 de noviembre de 2015, del Ministerio de Salud y Protección Social se adopta el Modelo de Atención en Salud para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y en su artículo 3 dispone:

"Implementación del Modelo de Atención en Salud. Corresponderá a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC, implementar el Modelo de Atención en Salud que se adopta en la presente resolución. Para la implementación del Modelo se expedirán los Manuales Técnico administrativos que se requieran por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC y se adelantará los trámites correspondientes ante el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la libertad"

Seguidamente, a través del Decreto 1142 de 2016 se modifican algunas disposiciones contenidas en el Capítulo 11 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, estableciendo en relación con las funciones de la USPEC:

Artículo 7.- Modifíquese el artículo 2.2.1.11.3.2 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

"Artículo 2.2.1.11 Funciones de la USPEC. (...)

2. Contratar la entidad fiduciaria con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas la Libertad y establecer las condiciones para que dicha entidad contrate la prestación integral y oportuna de los servicios de salud para la población privada de la libertad, de acuerdo con las decisiones del Consejo Directivo del Fondo, así como con el Modelo en Servicios Salud establecido y teniendo en consideración los respectivos manuales técnicos administrativos para la prestación de servicios de que se adopten.

3. Contratar actividades supervisión e interventoría sobre el contrato fiducia mercantil que se suscriba, con los recursos del Fondo Nacional de Salud de Personas Privadas la Libertad de acuerdo a lo previsto en el numeral 6 del artículo 2.2.1.11.2.3 del presente capítulo. (...)

Siendo preciso indicar en este punto que, aquellas funciones relacionadas con la suscripción de los contratos de fiducia mercantil para la prestación del servicio de salud de la PPL, solo recayeron en manos de la USPEC, hasta el 1 de enero de 2016, como quiera que con antelación a dicha fecha, aquella competencia se encontraba reglamentariamente instituida en cabeza de **CAPRECOM EICE** Hoy Liquidada, al tenor de los Decretos **2496 de 2012 y 2519 de 2015**.

Competencia funcional ésta que la USPEC satisfizo en su integridad, a través de la celebración de los siguientes contratos:

- **De Fiducia Mercantil Nro. 363 de 2015**, de fecha 23 de diciembre de 2015 suscrito entre la USPEC y la **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A** cuyo objeto consistió en: "celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos de los recursos dispuestos por el fideicomitente en el fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad", y cuyo plazo de ejecución se extendió durante toda la vigencia 2016.





- De Fiducia Mercantil Nro. 331 de 2016, de fecha 27 de diciembre de 2016, suscrito entre la USPEC y el CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017, cuyo objeto consiste en: "administración y pagos de los recursos dispuestos por el fideicomitente en el fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad". Con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018.
- De Fiducia Mercantil Nro. 145 de 2019, de fecha 29 de marzo de 2019, suscrito entre la USPEC y el CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019, cuyo objeto consiste en: "administración y pagos de los recursos dispuestos por el fideicomitente en el fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad". Con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019.

En tal virtud, y en lo que respecta al Servicio de Salud, resulta evidente que con la celebración de los precitados contratos de fiducia mercantil, la USPEC ha satisfecho el marco competencial y obligacional que la impone la normativa atrás enlistada, y por tal razón, los fundamentos fácticos enrostrados por la parte convocante y en los cuales fundamenta el daño moral, derivado de la prestación del servicio de salud, no podría ser imputado jurídicamente a esta entidad:

2. Imposibilidad de imputar fáctica o jurídicamente los daños alegados a la USPEC bajo ninguno de los dos regímenes de responsabilidad civil extracontractual.

3.1 En relación con el régimen de responsabilidad subjetivo.

En relación con este título de imputación, el H. Consejo de Estado ha establecido:

"[l]a falla del servicio, o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u ordenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía"⁶

De conformidad con dicha regla y al tenor de lo expuesto en el acápite inmediatamente anterior, relativo al contenido obligacional que nutre el marco competencial y funcional de la USPEC, los daños alegados de forma alguna podrían ser imputados a mi representada bajo este título de imputación ATENDIENDO A LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS Y CONTRACTUALES DESPLEGADAS POR LA USPEC, y respecto de las cuales no existe fundamento ni sustento jurídico ni fáctico alguno, a partir del cual se dable calificar que su prestación se dio de forma irregular o ineficiente, así como tampoco que la USPEC se ha sustraído, o ha prestado el servicio en forma tardía.

En tal virtud, y habiendo cumplido y satisfecho la USPEC, el marco obligacional de que tratan los articulados atrás mencionados, es indefectible que los daños alegados no podrían ser imputados ni fáctica ni jurídicamente a esta entidad, bajo dicho régimen de responsabilidad.

2.2. En relación con el régimen de responsabilidad objetivo.

En relación con este título de imputación ha sostenido el H. Consejo de Estado:

⁶ Consejo de Estado Colombiano, Sección Tercera, Sentencia del 7 de abril de 2011 expediente Nro 20750, MP Mauricio Fajardo Gómez.





"En diferentes ocasiones esta Corporación ha enmarcado la responsabilidad del Estado bajo el título de responsabilidad objetiva, teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad y conforme al artículo 90 de la Constitución Política, pues en estos casos se presentan relaciones especiales de sujeción. De acuerdo con lo anterior y en atención con los precedentes de la Sala que hoy atienden la responsabilidad del Estado conforme al régimen objetivo, la misma se sustenta en la tesis de "condiciones especiales de sujeción"; en el entendido que: "(...) [E]l hecho de que una persona se encuentre internada en un centro carcelario implica la existencia de subordinación del recluso frente al Estado. Dicha subordinación produce, como consecuencia, que el recluso se encuentre en una "condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta", de la que se hace desprender una relación jurídica especial que se sustenta en la tensión entre la restricción, limitación o modulación y el respeto de los derechos del recluso, con especial énfasis por la tutela del derecho a la vida y a la integridad personal, los cuales no se limitan o suspenden por la propia condición o situación jurídica del recluso (...)"⁷

Al tenor de lo anterior, es necesario destacar que los daños alegados por la parte actora, tampoco podrían ser imputados a la USPEC a partir de dicho régimen de responsabilidad, como quiera que de conformidad con las competencias asignadas a mi representada, la USPEC no detenta una posición de garante o una intrínseca relación de especial sujeción respecto de la población privada de la libertad, como si la ostenta el INPEC al tenor de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2 del Decreto 4151 de 2011 que establece como responsabilidad de dicha entidad:

"Custodiar y vigilar a las personas privadas de la libertad al interior de los establecimientos de reclusión para garantizar su integridad, seguridad y el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial"

En tal virtud, deviene en incontrovertible que cualquiera que sea el régimen de responsabilidad estatal a partir del cual su H. Señoría disponga desatar de fondo el presente asunto, bajo ninguno de los dos títulos o regímenes de responsabilidad es dable imputar responsabilidad civil extracontractual a mi prolijada.

IV. EXCEPCIONES.

De conformidad con los argumentos expresados a lo largo de la presente contestación de demanda, solicito muy comedidamente al H. Señor Juez, declarar probadas las excepciones que a continuación me permito enlistar, así como cualquiera otra excepción que su H. Señoría encuentre probada con ocasión de la presente contestación de demanda:

Previas y mixtas.

1. Falta de Legitimidad en la causa por pasiva.

En relación con la ausencia de legitimación en la causa por pasiva, el H. Consejo de Estado en sentencia del 3 de mayo de 2013 proferida dentro del expediente 26112 estableció que aquella:

*"[s]e configura cuando la entidad demandada no participó en los hechos invocados como dañosos y, en consecuencia, no está llamada a responder por los perjuicios que éstos hubieran podido causar"*⁸

⁷ Consejo de Estado Colombiano, Sentencia del 18 de mayo de 2017 expediente número 37497.

⁸ Consejo de Estado Colombiano, sentencia del 3 de mayo de 2013 expediente Nro. 26112





Atendiendo a que en el presente asunto, se alega como daño antijurídico el daño moral presuntamente irrogado a la parte demandante, derivado de las condiciones de hacinamiento que se presenta en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Barranquilla en donde el demandante se encuentra recluso, y de conformidad con lo expresado a lo largo de la presente contestación de la demanda, en especial lo manifestado en el acápite denominado **"IMPOSIBILIDAD DE IMPUTAR FÁCTICA Y JURIDICAMENTE LOS DAÑOS ALEGADOS A LA USPEC BAJO CUALQUIERA DE LOS DOS REGÍMENES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL"** de las razones de defensa atrás señaladas y que hago parte íntegra de la presente excepción, es evidente que la USPEC ha adelantado y satisfecho cada una de las gestiones administrativas, logísticas y contractuales para el suministro de bienes y servicios, tales como alimentación, mejoramiento de la infraestructura y la suscripción de los contratos de fiducia mercantil Nro. 331 de 2016 de fecha 27 de diciembre de 2016 y Nro. 363 de 2015 para la prestación del servicio de salud a la población Privada de la Libertad.

En tal virtud, es palmario que a partir del cumplimiento a cabalidad del contenido obligatorio asignado a la USPEC a través de las gestiones logísticas, administrativas y contractuales asignadas a esta entidad, aunado a que, en general, la crisis carcelaria y penitenciaria en Colombia, es una problemática que data de décadas atrás, lo cual se acredita entre otras, a través del contenido de las sentencias T-606, T-607 y T-153 de 1998 proferidas por la Corte Constitucional Colombiana, por medio de las cuales se declaró el **ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LAS PRISIONES COLOMBIANAS**. Es incontrovertible que la problemática del hacinamiento carcelario, a que refiere la parte actora y en cuya causa se origina el presente medio de control, **SE CONFIGURÓ DESDE ANTES DE QUE ESTA ENTIDAD ENTRARA A FUNCIONAR** a la luz del Decreto 4150 de 2011.

Así las cosas, es incontrovertible que la Gestión de la USPEC, contrario a ser participativa del daño alegado, se ha erigido como una solución a una problemática estructural, razón por la cual, de conformidad con la regla jurisprudencial citada al inicio de la presente excepción, es evidente que **NO EXISTE FUNDAMENTO JURÍDICO NI FÁCTICO A PARTIR DEL CUAL MI REPRESENTADA PUEDIERA SER LLAMADA A RESPONDER CIVILMENTE POR LA PRODUCCIÓN DE LOS DAÑOS ENROSTRADOS A TRAVÉS DEL PRESENTE MEDIO DE CONTROL AL NO HABER PARTICIPADO EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO QUE SE ALEGA. POR TAL RAZÓN, ES INCONTRÓVERTIBLE QUE A MI PROHIBIDA LE ASISTE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DENTRO DEL PRESENTE ASUNTO.**

De fondo

1. Ausencia de acreditación del daño antijurídico como primer elemento de la responsabilidad civil extracontractual.

Al tenor de lo expuesto en las razones de defensa que incorpora el presente escrito, en especial en el acápite denominado: "Ausencia de acreditación del daño antijurídico como primer elemento de la responsabilidad civil extracontractual" y cuyos argumentos hago parte íntegra de la presente excepción.

Se tiene que la presente demanda no comporta vocación de prosperidad alguna, al no encontrarse plenamente acreditados los daños alegados por la parte actora, y en cuya virtud se pretende infundadamente comprometer la responsabilidad civil extracontractual del Estado.

En relación con el daño, como primer elemento de la responsabilidad civil extracontractual, ha sostenido el H. Consejo de Estado Colombiano:

"...[e]l daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y

Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13, 14
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co



La Justicia
es de todos



jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura–, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar el interés que se debate en el proceso”⁹

En tal virtud, y de conformidad con el libelo demandatorio, se tiene que la parte demandante, únicamente se ciñe a establecer o enrostrar una serie de circunstancias que aparentemente ocurren al interior del Establecimiento Penitenciario y Carcelario: Barranquilla, **SIN ESTABLECER, CONCRETIZAR NI DETERMINAR DE FORMA ALGUNA ¿Cuáles fueron los hechos concretos, ciertos y personales que sufrió la parte demandante, y a raíz de los cuales sea dable acreditar el daño antijurídico alegado?**

Pues contrario a la precitada regla establecida por el H. Consejo de Estado, la parte demandante pareciera querer obviar el requisito de acreditación del daño antijurídico como primer elemento de la responsabilidad civil extracontractual, y partir de la base de que, por el solo hecho de haber estado recluso, per se, se configuran los daños enrostrados.

Sin embargo, al no ser plausible la posición de la parte actora, y ser imperiosa la acreditación del daño antijurídico para desplegar un estudio de imputación fáctica y jurídica, y al no haber sido acreditado, determinado, ni haber sido establecidas la titularidad o carácter personal del daño antijurídico cuya reparación se pretende, indefectiblemente nos encontramos ante un daño eventual, incierto e hipotético, que no comporta vocación de comprometer la responsabilidad civil extracontractual del Estado.

2. Imposibilidad de imputar fáctica y jurídicamente los daños alegados a la USPEC

Al tenor de lo expuesto en las razones de defensa que incorpora el presente escrito, en especial en el acápite denominado: “Imposibilidad de imputar fáctica y jurídicamente los daños alegados por la parte actora, a la USPEC”, y que hago parte íntegra de la presente excepción, es incontrovertible que de conformidad con el marco funcional y competencial que nutre el contenido obligacional de la USPEC en relación, tanto con el mejoramiento de la infraestructura penitenciaria y carcelaria de los establecimientos de reclusión de todo el país, como con el servicio de salud para la PPL aunado a las gestiones administrativas, logísticas y contractuales desplegadas por la USPEC para la satisfacción de dichos fines, desde que aquellas funciones recayeron en sus manos es incontrovertible que los daños alegados no pueden ser imputados ni fáctica ni jurídicamente a mi representada, bajo ninguno de los dos regímenes de responsabilidad civil extracontractual.

Para dar sustento a esta excepción, es menester reiterar que, de conformidad con el marco funcional de esta entidad, el cual se halla vertido en el artículo 5 del decreto 4150 de 2011¹⁰ imprimiendo un contenido

⁹ CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN C, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO Reparación Directa Radicado: 05001232500019942279 01 Sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012)

¹⁰ La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, cumplirá las siguientes funciones:

1. Coadyuvar en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC, en la definición de políticas en materia de infraestructura carcelaria.
2. Desarrollar e implementar planes, programas y proyectos en materia logística y administrativa para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios que debe brindar la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.
3. Definir, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, los lineamientos que en materia de infraestructura se requieran para la gestión penitenciaria y carcelaria.
4. Administrar fondos u otros sistemas de manejo de cuentas que se asignen a la Unidad para el cumplimiento de su objeto.
5. Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición, suministro y sostenimiento de los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y de infraestructura que sean necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria.
6. Elaborar las investigaciones y estudios relacionados con la gestión penitenciaria y carcelaria, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho y hacer las recomendaciones correspondientes.

Avenida Calle 28 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13, 14
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co





de orden eminentemente administrativo, logístico y contractual y en cuya virtud, fueron contratados los servicios antes mencionados, para el mejoramiento de la infraestructura carcelaria del Establecimiento de Barranquilla y asimismo, fueron suscritos los contratos de fiducia mercantil número 331 de 2016 y 363 de 2015 para la prestación del servicio de salud, siendo, hasta antes del 1 de enero de 2016 la prestación del servicio de salud una competencia a cargo de CAPRECOM EICE hoy liquidada según lo disponen los Decretos 2496 de 2012 y 2519 de 2015.

Es evidente que los daños alegados no pueden ser imputados ni fáctica ni jurídicamente a la USPEC bajo ninguno de los dos regímenes de responsabilidad civil extracontractual, respecto del subjetivo, por cuanto no existe fundamento alguno para sostener que el servicio a cargo de la USPEC fue prestado en forma irregular, ineficiente, defectuoso o tardío, y desde el punto de vista objetivo, por cuanto la USPEC no detenta de forma alguna posición de garante o de intrínseca relación de especial sujeción con la población privada de la libertad, como si la detenta el INPEC al tenor de lo dispuesto en el Decreto 4151 de 2011 artículo 2 numeral 6.

En tal virtud, en el evento de que su H. Señoría disponga desplegar un estudio de fondo del presente asunto, solicito muy comedidamente declarar probada la presente excepción, y en tal razón, no atribuir responsabilidad civil a la USPEC derivada de los daños alegados por la parte demandante.

3. Genérica o innominada.

Solicito muy comedidamente al H. Señor Juez, declarar probada cualquiera otra excepción que halle probada de los argumentos expresados a lo largo del presente escrito, y que no haya sido señalada taxativamente en el presente escrito.

V. SOLICITUD:

De conformidad con los argumentos expresados a lo largo de la presente contestación de demanda, solicito muy comedidamente a su H. Señoría, declarar probada la excepción de caducidad, desestimar todas y cada una de las pretensiones de la demanda incoada, declarando probadas las excepciones propuestas, o las que, de conformidad con los argumentos aquí señalados, su H. Despacho encuentre probadas.

VI. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificación, la suscrita apoderada las recibe en la Av. Calle 26 # 69-76 Torre 4 Piso 12 Bogotá, Colombia -Oficina Asesora Jurídica y a través de los correos electrónicos myriam.herrera@uspec.gov.co y/o buzondjudicial@uspec.gov.co.

7. Promover, negociar, celebrar, administrar y hacer seguimiento a contratos de asociaciones público-privadas o de concesión, o cualquier tipo de contrato que se suscriba que tengan por objeto la construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y prestación de servicios asociados a la infraestructura carcelaria y penitenciaria.
8. Realizar, directamente o contratar con terceros, las funciones de supervisión, interventoría, auditorías y en general, el seguimiento a la ejecución de los contratos de concesión y de las alianzas público-privadas, o de concesión, o cualquier tipo de contrato que se suscriba.
9. Gestionar alianzas y la consecución de recursos de cooperación nacional e internacional, dirigidos al desarrollo de la misión institucional, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y las autoridades competentes.
10. Asesorar, en lo de su competencia, en materia de gestión penitenciaria y carcelaria.
11. Diseñar e implementar sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de la misión institucional.
12. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la Entidad."

Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 Pisos 12, 13, 14
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co





V. PRUEBAS

Comendidamente solicito al H. Señor Juez otorgar valor probatorio a los siguientes documentos que remito con la presente contestación de demanda.

1. Decreto 2519 de 2015, por lo cual se suprime LA CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPRECOM" EICE.
2. Resolución Nro. 1257 de 2015, Por medio de la cual se adjudica la Selección Abreviada de Menor Cuantía.
3. Contrato de Fiducia Mercantil Nro. 363 de 2015 de fecha 23 de diciembre de 2015.
4. Contrato de Fiducia Mercantil Nro. 331 de 2016, de fecha 27 de diciembre de 2016.
5. Contrato de Fiducia Mercantil Nro. 145 de 2019, de fecha 29 de marzo de 2019.
- 6.

VIII. ANEXOS.

Además de los enlistados en el acápite de pruebas en medio magnético, allego poder para actuar junto con los documentos de representación judicial de la entidad.

De su H. Señoría

MYRIAM ESTHER HERRERA BETANCOURT
C.C. No. 1.098.680.103 de Bucaramanga
T.P. 251.916 del C. S. de la J.



Bogotá D.C., noviembre de 2019

Señores:
JUZGADO TERCERO (3) ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA
E. S. D.

Referencia: PODER
Asunto: REPARACIÓN DIRECTA
Radicado: 08001333300320180035000
Demandante: ABEL JOSÉ CORONADO MEZA
Demandado: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC.

JULIBETH DE LEÓN CUETO, en representación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, nombrada en el cargo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) mediante Resolución No. 000668 del 01 de octubre de 2019, delegataria de la función de representación judicial de la entidad conforme a la Resolución No. 84 de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General; respetuosamente manifiesto que otorgo **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** en cuanto a derecho se requiere, a la Doctora **MYRIAM ESTHER HERRERA BETANCOURT**, también mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.098.680.103 de Bucaramanga, con Tarjeta Profesional No. 251.916 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe dentro del proceso de la referencia en representación de los derechos e intereses que le asisten a esta Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC.

La apoderada queda revestida de las facultades de las cuales trata el artículo 77 del Código General del Proceso, además de las inherentes, concomitantes y subsiguientes a este mandato tendrá las de ley, sin que pueda decirse en ningún momento que actúa sin poder suficiente y expresamente para recibir, sustituir, transigir, desistir, conciliar, proponer excepciones e interponer los recursos de ley y en general para todo cuanto en derecho conveniente en la defensa de nuestros intereses dentro del proceso de la referencia.

Sírvase reconocerse personería y tenerla como nuestra apoderada en los términos y facultades de este escrito.

Atentamente,


JULIBETH DE LEÓN CUETO
C.C. No. 1.143.118.654 de Barranquilla
Acepto,


MYRIAM ESTHER HERRERA BETANCOURT
C.C. No. 1.098.680.103 de Bucaramanga
T.P. 251.916 del C.S. de la J

Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13, 14
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co

Código: G1-S1-FO-03
Versión: 13

Vigencia: 21/01/2019

 CENTRO DE SERVICIOS ASESORIA Y ASesoría
PARA LOS SERVIDORES DELEGADOS DE LA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
DOCUMENTO FUE PRESENTADO PERSONALMENTE
por **JULIBETH DE LEÓN CUETO**
quien se identifica con C.C. No. 1.143.118.654
P. No. 251.916 Bogotá D.C. a 14/11/2019

 CENTRO DE SERVICIOS ASESORIA Y ASesoría
PARA LOS SERVIDORES DELEGADOS DE LA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
DOCUMENTO FUE PRESENTADO PERSONALMENTE
por **MYRIAM ESTHER HERRERA BETANCOURT**
quien se identifica con C.C. No. 1.098.680.103
P. No. 251.916 Bogotá D.C. a 14/11/2019

 La justicia
es de todos



000668

DEL 07 OCT 2019

"Por la cual se hace un encargo en un empleo de libre nombramiento y remoción"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

En uso de sus facultades legales y en especial las contenidas numeral 15 del artículo 12 del Decreto No. 4150 de noviembre de 2011, y

CONSIDERANDO

Que el inciso 3 del artículo 24 de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, modificado por la Ley 1960 del 27 de junio de 2018, señale que: (...) "Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. (...)

Que mediante Resolución No. 000662 de 25 de septiembre de 2019, se aceptó la renuncia a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica señora IVONNE LILIANA RODRIGUEZ HERRERA. A partir del 1 de octubre de 2019.

Qua en razón a lo anterior, el empleo de Jefe de Oficina Asesora Jurídica, Código 1045 Grado 11, presenta vacancia desde el 1 de octubre de 2019, por lo que es necesario proveerlo a través de la figura del encargo.

Que de acuerdo a las normas legales, el salario correspondiente al encargo del cargo Jefe de Oficina Asesora Jurídica Código 1045 Grado 11, será reconocido a partir del 1 de octubre de 2019.

Que una vez revisada la historia laboral de la doctora JULIBETH DE LEÓN CUETO, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.143.118.654 titular del cargo Asesor Código 1020 Grado 10, por parte del Grupo de Administración de Personal se determinó que cumple con los requisitos para ser encargada del empleo de libre nombramiento y remoción Jefe de Oficina Asesora Jurídica Código 1045 Grado 11, a partir del 1 de octubre de 2019

En virtud de lo anterior,

RESOLVE:

ARTÍCULO 1. Encomendar a la doctora **JULIBETH DE LEÓN CUETO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.143.118.654 titular del cargo de Asesor Código 1020 Grado 10, del empleo de libre contratación y remoción Jefe de Oficina Asesora Jurídica Código 1045 Grado 11, a partir del 1 de octubre de 2019, en razón a la vacancia del cargo, sin perjuicio de continuar desempeñando las funciones del empleo actual.

ARTÍCULO 2. El salario correspondiente al encargo del cargo Jefe de Oficina Asesora Código-1045-Grado 11, será reconocido a partir del 1 de octubre de 2019 a la doctora **JULIBETH DE LEÓN CUETO**.

ARTICULO 3. Comunicar la presente resolución a las doctora JULIBETH DE LEÓN CUETO,

ARTÍCULO 4. Archivar copia de la presente resolución en las historia laboral de la servidora pública.

ARTÍCULO 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

RICARDO VARELA DE LA ROSA
Director General Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

Elizbeth y René / Jefe de Oficina (Ejecutivo) Grupo de Administración
René / Jefe de Oficina (Ejecutivo) Grupo de Administración y Finanzas
Roberto / Jefe de Oficina (Ejecutivo) Grupo de Administración y Finanzas

Avenida Calle 26 No. 69-75 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13, 14
Teléfono: (57) (1) 4964130
www.uspec.gov.co

Código: 01-61-FQ-01
Versión: 12

Vigencia: 21/01/2019

Página: 1 de 1

"Por medio de la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones"

La Directora General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -SPC

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política, 9º de la Ley 489 de 1998, el Decreto 4150 de 2011, Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 209 de la Constitución Política: *"La función administrativa esté al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones"*

Que el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, consagra que *"Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias."*

"Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley"

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 establece: *"De la Delegación para Contratar. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes"*

Que el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Que así mismo, la referida norma preceptúa que en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

Que el artículo 3º ibídem establece que en virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

Que de igual manera la precitada disposición normativa contempla que en virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los

procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.

Que en consecuencia y con el fin de garantizar la aplicación de los principios de eficacia y celeridad de las funciones asignadas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC, y mejorar los niveles de eficiencia en la gestión pública y administrativa conferida, se hace necesario delegar algunas funciones inherentes a la competencia para ordenación del gasto y otras competencias de naturaleza administrativa a funcionarios del nivel directivo de la Unidad.

Que en virtud de lo anterior;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DELEGAR en el Director Administrativo y Financiero, la facultad de la ordenación del gasto de rubros de funcionamiento e inversión y la celebración de los contratos y convenios que se requieran, hasta por un monto equivalente a Ochocientos (850) salarios mínimos legales, monto que corresponde a la menor cuantía de la Unidad, de conformidad con el artículo segundo de la Ley 1150 de 2007 y el Presupuesto Total aprobado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DELEGAR en el Director Administrativo y Financiero, los siguientes asuntos relacionados con la administración del personal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC:

- 1°. Conceder comisiones de servicios al interior del país, de acuerdo con las reglamentaciones sobre la materia.
- 2°. Dar posesión a los funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC a excepción del personal del nivel directivo.
- 3°. Conceder licencias no remuneradas, previo visto bueno del jefe inmediato de conformidad con las normas vigentes.
- 4°. Conceder permiso remunerado a los funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC- hasta por el término de tres (3) días, cuando exista justa causa, previo el visto bueno del jefe inmediato.
- 5°. Conceder licencias remuneradas por incapacidad, maternidad, paternidad o accidente de trabajo, de acuerdo con las normas vigentes a los funcionarios del nivel profesional, técnico y asistencial.
- 6°. Conceder el disfrute, interrupción o aplazamiento de vacaciones, previo visto bueno del jefe inmediato.
- 7°. Conferir prórrogas para tomar posesión a los servidores públicos, de acuerdo con las normas vigentes.
- 8°. Reconocer prestaciones sociales definitivas a ex funcionarios
- 9°. Expedir los certificados de insuficiencia de personal de planta, para efectos de los procesos de contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión.
- 10°. Conceder permisos de estudio durante la jornada laboral, de acuerdo con las normas

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia
Teléfono (57) (1) 4864130
www.spc.gov.co



Ministerio
de Justicia

PROSPERIDAD
PARA TODOS

OP-110-3-01 V1

vigentes sobre la materia, previo visto bueno del jefe inmediato.

11°. Suscribir los formularios de afiliación, novedades y retiro de los funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC, relacionados con las entidades de Seguridad Social, así como los de la Caja de Compensación a la cual se haya afiliado la entidad.

12°. Formular solicitud de autorización ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, para efectuar encargos y nombramientos provisionales, de acuerdo con la normatividad vigente.

13°. Reconocimiento de trabajo suplementario, dominicales y festivos, recargos nocturnos y compensatorios.

14°. Autorizar traslados presupuestales internos en el Presupuesto de Funcionamiento de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes sobre la materia.

15°. Ordenar el gasto de la caja menor y realizar su correspondiente legalización.

16°. Ordenar el pago por concepto de servicios personales, aportes parafiscales, pagos a EPS y Fondos de Pensiones y Transferencias de ley del personal de nómina de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y demás pagos inherentes a compromisos contractuales adquiridos por la Unidad en ejercicio de sus funciones.

17°. La supervisión de los contratos o convenios en los asuntos de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO: DELEGAR en el Director Administrativo y Financiero las siguientes funciones relacionadas con la administración de bienes de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC:

1°. La representación legal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC, para suscribir los formularios únicos de tránsito, para los trámites relativos a los vehículos de su propiedad.

2°. La suscripción de las pólizas de garantía para amparar los bienes muebles e inmuebles de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC.

3°. Las solicitudes de inclusión de bienes en las pólizas de garantía que amparan los bienes a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC.

4°. El trámite de revisión y autorización de pago de los servicios públicos, cuotas de administración e impuestos de bienes muebles e inmuebles a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC.

ARTÍCULO CUARTO: DELEGAR en el Director de Gestión Contractual la aprobación de las pólizas de los contratos que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios suscriba.

ARTÍCULO QUINTO: DELEGAR en el Director Administrativo y Financiero, el Director de Gestión Contractual, el Director de Logística, Director de Infraestructura y Jefes de Oficina, la solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal dependiendo de los rubros presupuestales que sean de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO: DELEGAR en el Subdirector Administrativo las siguientes funciones



relacionadas con la administración de personal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC:

1º. Autorizar por escrito el trabajo suplementario en horas distintas a la jornada laboral, previa justificación del jefe inmediato y certificado de disponibilidad presupuestal que lo ampare, y reconocerlo con la certificación expedida por el jefe respectivo.

2º. Decidir sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos para el desempeño de los cargos de la planta de personal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, de los aspirantes inscritos en la convocatorias que adelante la Comisión Nacional de Servicio Civil, de acuerdo con las normas vigentes, así como resolver los recursos de reposición que por este efecto se interpongan.

3º. Expedir todas las certificaciones laborales que se requieran para los efectos de los diferentes trámites relacionados con la administración de personal, incluyendo las destinadas a la emisión de bonos pensionales o al reconocimiento de pensiones.

ARTÍCULO SÉPTIMO: DELEGAR en el Subdirector Administrativo la siguiente función relacionada con la administración de bienes de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC:

1º. Decidir la baja definitiva de bienes muebles e inmuebles de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC.

ARTÍCULO OCTAVO: DELEGAR en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica las siguientes funciones:

1º. La representación legal en materia judicial y extrajudicial de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en los procesos y actuaciones que se instauran en su contra, o que ésta deba promover.

2º. La respuesta a los derechos de petición relacionados con los objetivos, misión y funciones de la entidad. Para este efecto todas las Dependencias de la Unidad en cada caso, deberán suministrar la información que la Oficina Asesora Jurídica requiera para dar respuesta a los derechos de petición presentados.

PARÁGRAFO: El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, mediante el otorgamiento de poder debe constituir mandatarios y apoderados en los abogados de la Oficina Asesora Jurídica, para que representen y actúen a nivel nacional a favor de esta entidad en los asuntos judiciales, extrajudiciales y demás de carácter litigioso en los que la Unidad deba actuar como demandante, denunciante y/o reclamante, como también para dar inicio e interponer las demandas por acción de repetición ordenadas por el Comité de Conciliación.

ARTÍCULO NOVENO: CONTROL DE LA DELEGACIÓN: Los Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina en los cuales se efectúa la presente delegación, deberán presentar un informe en la primera reunión de cada mes del Comité de Dirección sobre las funciones materia de delegación.

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución rige a partir de su expedición y deroga las Resoluciones .000395 del 19 de noviembre de 2012 y 000035 del 2 de febrero de 2013 y demás actos administrativos de delegación que le sean contrarios y que hayan sido expedidos con anterioridad.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 7 MAR 2013



GISELE MANRIQUE VACA
Directora General
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- SPC

3: Myriam Jose Ana Lara Saquero - Jefe Oficina Asesora Jurídica

1870

1871

1872

1873